2. Permanecerá en vigor, hasta que una de las Administraciones contratantes haya participado a la otra, con seis meses de anticipación, su intención de terminarlo.

Cualquiera de las dos Administraciones podrá suspender temporalmente los servicios de encomiendas contra reembolso o con valor declarado en todo o en parte, siempre que mediaren razones para ello, o restringirlo tan sólo a ciertas oficinas. Pero en este caso, se han de enviar las notificaciones previas y oportunas de haberse adoptado esta medida, a la otra Administración, noticia que se debe enviar por la vía más rápida si ello fuere necesario.

Hecho por duplicado y firmado en Bogotá, el día 31 de enero de 1939, y en Wáshington, el día 7 de febrero de 1939.

El Ministro de Correos y Telégrafos de la República de Colombia,

(Firmado), **Alfredo Cadena D'Costa**

The Postmaster General of the United States of America,

(Firmado), **James A. Farley**

El anterior Acuerdo de Encomiendas Postales entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, ha sido negociado y concluido con mi conocimiento y aprobación, y por lo tanto, se aprueba y ratifica.

En testimonio de lo antes expresado, he ordenado que se le fije el sello de los Estados Unidos.

(Firmado), **FRANKLIN D. ROOSEVELT**

Por el Presidente (firmado), **Cordell Hull**, Secretario de Estado.

Wáshington, 14 de febrero de 1939.

Organo Ejecutivo—Bogotá, 6 de septiembre de 1940.

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales.

(Firmado), **EDUARDO SANTOS**

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Firmado), **Luis LOPEZ DE MESA**

El Ministro de Correos y Telégrafos,

(Firmado), **Alfredo CADENA D' COSTA**

Es copia fiel.

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores,

(Firmado), **Alberto González Fernández**,
decreta:

Artículo único. Apruébase en todas sus partes el Convenio para canje de encomiendas con valor declarado y contra reembolso, celebrado entre Colombia y los Estados Unidos.

Dada en Bogotá a veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.

El Presidente del Senado, **PEDRO CASTRO MONSALVO**. El Presidente de la Cámara de Representantes, **MOISES PRIETO**—El Secretario del Senado, **Jaime Soto**—El Secretario de la Cámara de Representantes, **Andrés Chaustre B.**

Organo Ejecutivo—Bogotá, 11 de marzo de 1943.

Publíquese y ejecútese.

ALFONSO LOPEZ

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho,

A. GONZALEZ FERNANDEZ

LEY 12 DE 1943 (11 DE MARZO)

por la cual se aprueba una Convención Internacional (Convención de 1936, para represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas).

El Congreso de Colombia,

vista la Convención de 1936, para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas, firmada en la Conferencia que se reunió en Ginebra del 8 al 26 de junio de dicho año, y que a la letra dice:

"Convención de 1936, para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas.

(Ginebra, 26 de junio de 1936)

El Presidente Federal de Austria, su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil; Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña, de Irlanda y de los Dominios Británicos de allende los

mares, Emperador de la India; Su Majestad el Rey de los Búlgaros; el Presidente del Gobierno Nacional de la República de la China; el Presidente de la República de Colombia; el Presidente de la República de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca y de Islandia; Su Majestad el Rey de Egipto; el Encargado del Poder Supremo de la República del Ecuador; el Presidente de la República Española; el Presidente de la República de Estonia; el Presidente de la República Francesa; Su Majestad el Rey de los Helenos; el Presidente de la República de Honduras; Su Alteza Serenísima del Reino de Hungría; Su Majestad el Emperador del Japón; el Presidente de los Estados Unidos de México; Su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco; el Presidente de la República de Panamá; Su Majestad la Reina de los Países Bajos; el Presidente de la República de Polonia; el Presidente de la República Portuguesa; Su Majestad el Rey de Rumania; el Consejo Federal Suizo; el Presidente de la República Checoslovaca; el Comité Central Ejecutivo de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas; el Presidente de la República del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;

Habiendo resuelto, por una parte, reforzar las medidas destinadas a reprimir las infracciones a las disposiciones de la Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya el 23 de enero de 1912, de la Convención firmada en Ginebra el 19 de febrero de 1925, y de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de narcóticos, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931, y, por otra parte, combatir, por los medios más eficaces en las actuales circunstancias, el tráfico ilícito de las drogas y sustancias a que se refieren estas Convenciones,

Han designado como sus Plenipotenciarios:

Los cuales, después de haberse presentado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:

ARTICULO I

1. En la presente Convención se entiende por "narcóticos" las drogas o sustancias a que se aplican, o se aplicarán las disposiciones de la Convención de La Haya, del 23 de enero de 1912, y de las Convenciones de Ginebra, de 19 de febrero de 1925, y del 13 de julio de 1931.

2. Según los términos de la presente Convención, se entiende por "extracción" la operación por la cual se separa un narcótico de la sustancia o del compuesto de que hace parte, sin que haya fabricación o transformación propiamente dichas. Esta definición de la palabra "extracción" no se refiere a los procedimientos por los cuales se obtiene el opio en estado natural de la adormidera o amapola del opio, procedimientos que caen bajo el término "producción."

ARTICULO II

Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a dictar las necesarias providencias legales para castigar severamente, y en particular con prisión y otras penas que priven de la libertad, los hechos siguientes:

a) La fabricación, transformación, extracción, preparación, posesión, oferta, venta, distribución, compra, cesión a cualquier título que sea, corretaje, despacho, despacho en tránsito, transporte, importación y exportación de drogas narcóticas, contrariamente a las disposiciones de dichas Convenciones.

b) La participación intencional en los hechos que contempla este artículo.

c) La asociación o combinación con la mira de llevar a cabo uno de los hechos premencionados.

d) Las tentativas, y en las condiciones previstas por la ley nacional, los actos preparatorios.

ARTICULO III

Las Altas Partes Contratantes que tienen jurisdicción extraterritorial sobre el territorio de la otra Alta Parte Contratante, se comprometen a dictar las necesarias disposiciones legislativas para castigar a sus nacionales que se hayan hecho culpables sobre este territorio de cualquiera de los hechos contemplados en el artículo 2, por lo menos tan severamente como si el hecho hubiese sido cometido en su propio territorio.

ARTICULO IV

Si se cometieren en países diferentes hechos que caigan bajo las categorías contempladas en el artículo 2, cada uno de éstos será considerado como una infracción distinta.

ARTICULO V

Las Altas Partes Contratantes cuya legislación nacional reglamente el cultivo, la cosecha y la producción, con la mira de obtener narcóticos, harán también severamente temible toda infracción de esta ley.

ARTICULO VI

Los países que admiten el principio del reconocimiento internacional de casos previos de convicción reconocerán también, en las condiciones previstas por la ley nacional, como causantes de dicho reconocimiento, las condenas extranjeras pronunciadas sobre cualquiera de los casos contemplados en el artículo 2.

ARTICULO VII

1. En los países que no admiten el principio de extradición de los nacionales, los ciudadanos que han entrado al territorio de su país, después de haberse hecho culpables en el Extranjero de cualquiera de los hechos contemplados en el artículo 2, deberán ser perseguidos y castigados de la misma manera que si el hecho hubiese sido cometido en dicho territorio, y esto, aún en el caso en que el culpable haya adquirido su nacionalidad posteriormente al cumplimiento de la infracción.

2. Esta disposición no es aplicable, si en semejante caso, no puede concederse la extradición de un extranjero.

ARTICULO VIII

Los extranjeros que han cometido en el Exterior una de las faltas previstas en el artículo 2, y que se encuentran en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, deben ser perseguidos y castigados de la misma manera que si el hecho hubiese sido cometido en este territorio, cuando se reúnan las siguientes condiciones:

a) Habiéndose pedido la extradición, no ha podido concederse ésta por cualquier razón extraña al hecho mismo;

b) La legislación del país de refugio admite como regla general la persecución por infracciones cometidas por extranjeros en el Exterior.

ARTICULO IX

1. Los hechos previstos por el artículo 2 quedarán comprendidos de pleno derecho como casos de extradición en todo tratado de extradición celebrado, o que haya de celebrarse, entre las Altas Partes Contratantes.

2. Las Altas Partes Contratantes que no subordinan la extradición a la existencia de un tratado, o a una condición de reciprocidad, reconocen los hechos arriba contemplados como casos de extradición entre ellas.

3. La extradición se concederá conforme al derecho del país requerido.

4. La Alta Parte Contratante a quien se dirija una demanda de extradición tendrá derecho, en todos los casos, de negarse a proceder al arresto, o a conceder la extradición, si sus autoridades competentes estiman que el hecho que motiva la persecución, o que haya dado lugar a la condenación, no es bastante grave.

ARTICULO X

Los narcóticos, como también las materias e instrumentos destinados a la realización de uno de los hechos previstos por el artículo 2, son susceptibles de embargo y confiscación.

ARTICULO XI

1. Cada Alta Parte Contratante deberá establecer, dentro del cuadro de su legislación nacional, una oficina central, encargada de vigilar y de coordinar todas las operaciones indispensables para evitar los hechos previstos por el artículo 2, y de obrar en tal forma que se tomen medidas para perseguir a personas culpables de delitos de este género.

2. Esta oficina central:

a) Deberá mantenerse en contacto estrecho con las demás entidades y organismos oficiales que se ocupen en narcóticos;

b) Deberá centralizar todas las informaciones, de modo que se facilite la investigación y prevención de los hechos contemplados en el artículo 2, y

c) Deberá mantenerse en contacto estrecho y podrá corresponder directamente con las oficinas centrales de los demás países.

3. Cuando el Gobierno de una Alta Parte Contratante tiene carácter federal, o cuando la autoridad ejecutiva de este Gobierno se halle repartida entre el Gobierno Central y los Gobiernos seccionales, la vigilancia y la coordinación indicadas en el párrafo 1, y el cumplimiento de las obligaciones especificadas en los incisos a) y b) del

párrafo 2, se organizarán de conformidad con el sistema constitucional o administrativo vigente.

4. En el caso de que la presente Convención se aplique a un territorio cualquiera en virtud del artículo 18, la aplicación de las disposiciones del presente artículo podrá garantizarse mediante la creación de una oficina central establecida en este territorio, y que actúe, en caso necesario, en combinación con la oficina central del territorio metropolitano interesado.

Los poderes y autorizaciones previstos para la oficina central podrán delegarse a la administración especial prevista por el artículo 15 de la Convención de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los narcóticos.

ARTICULO XII

1. La oficina central colaborará, hasta donde le sea posible, con las oficinas centrales extranjeras, a fin de facilitar la prevención y la represión de los delitos previstos en el artículo 2.

2. Este órgano transmitirá, dentro de los límites que juzgue conveniente, a la oficina central de todos los demás países que estén en ello interesados:

a) Los informes que puedan permitir que se proceda a todas las verificaciones y operaciones relativas a las transacciones en curso o proyectadas;

b) Las indicaciones que haya podido recoger sobre la identidad y señales de los traficantes, con la mira de vigilar sus movimientos y cambios de lugar;

c) El descubrimiento de fábricas clandestinas de narcóticos.

ARTICULO XIII

1. La transmisión de las comisiones rogatorias relativas a las infracciones contempladas en el artículo 2 habrá de efectuarse:

a) De preferencia, por vía de comunicación directa entre las autoridades competentes de cada país, y, llegado el caso, por mediación de las oficinas centrales;

b) Por correspondencia directa de los Ministros de Justicia de los dos países, o por envío directo, por otra autoridad competente del país requeriente, al Ministro de la Justicia del país requerido;

c) Por mediación del agente diplomático o consular del país requeriente en el país requerido. Las comisiones rogatorias se transmitirán por dicho agente a la autoridad que indique o designe el país requerido.

2. Cada Alta Parte Contratante puede declarar, por comunicación dirigida a las demás Altas Partes Contratantes, que ella entiende que las comisiones rogatorias que deban cumplirse o diligenciarse en su territorio, han de transmitirse por la vía diplomática.

3. En el caso del inciso c) del párrafo 1, deberá dirigirse una copia de la comisión rogatoria, al mismo tiempo, por el agente diplomático o consular del país requeriente, al Ministerio de Negocios Extranjeros del país requerido.

4. A no ser que se convenga otra cosa, la comisión rogatoria debe redactarse ya sea en la lengua de la autoridad requerida, o bien en la lengua convenida entre los países interesados.

5. Cada Alta Parte Contratante hará conocer, mediante comunicaciones dirigidas a cada una de las demás Altas Partes Contratantes, el modo o modos de transmisión que dicha Parte admita para las comisiones rogatorias de esta Alta Parte Contratante.

6. Hasta el momento en que una Alta Parte Contratante efectúe tal comunicación, se mantendrá su procedimiento actual en punto de comisión rogatoria.

7. La ejecución o diligencia de las comisiones rogatorias no podrá dar lugar a reembolso de impuestos o gastos distintos de los gastos de peritazgo.

8. Nada, en el presente artículo, podrá interpretarse como constitutivo, por parte de las Altas Partes Contratantes, de compromiso de admitir, en lo concerniente al sistema de las pruebas en materia represiva, una derogación de sus leyes, o de dar curso a comisiones rogatorias en forma que no sea dentro de los límites de sus respectivas legislaciones.

ARTICULO XIV

La participación de una Alta Parte Contratante en la presente Convención no debe interpretarse como perturbadora de su actitud sobre la cuestión general de la competencia de la jurisdicción penal, como cuestión de Derecho Internacional.

ARTICULO XV

La presente Convención deja a salvo el principio de que los hechos contemplados en los artículos 2 y 5 deberán, en cada país, juzgarse, clasificarse y castigarse de conformidad con las normas generales de la legislación nacional.

ARTICULO XVI

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán entre sí, por mediación del Secretario General de la Sociedad de Naciones, las leyes y reglamentos promulgados para dar

efecto a la presente Convención, como también un informe anual relativo al funcionamiento de la Convención en sus respectivos territorios.

ARTICULO XVII

Si surgiere entre las Altas Partes Contratantes cualquier diferencia relativa a la interpretación o aplicación de la presente Convención, y si tal diferencia no pudiere arreglarse satisfactoriamente por la vía diplomática, se arreglará de conformidad con cualesquiera convenios vigentes entre las Partes, que sean aplicables al caso y provean al arreglo de disputas internacionales.

En el caso de que tales disposiciones o providencias no existan entre las Partes en la diferencia, dichas partes se someterán a un procedimiento arbitral o judicial. A falta de acuerdo sobre la escogencia de otro tribunal, dichas Partes someterán la disputa, a petición de una de ellas, a la Corte Permanente de Justicia Internacional, si tales Partes lo son también en el Protocolo del 16 de diciembre de 1930, relativo al Estatuto de dicha Corte; y si tales Partes no lo fueren ambas en dicho Protocolo, entonces se someterá el caso a un tribunal de arbitramento, constituido de acuerdo con la Convención de La Haya, del 18 de octubre de 1907, para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales.

ARTICULO XVIII

1. Cualquier Alta Parte Contratante podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, que al aceptar la presente Convención dicha Parte no asume obligación respecto del conjunto o de una parte de sus colonias, protectorados, territorios ultramarinos, o territorios contados bajo su soberanía o bajo su mandato; y la presente Convención no se aplicará a los territorios mencionados en esta declaración.

2. Cualquier Alta Parte Contratante podrá dar ulteriormente, en todo momento, aviso al Secretario General de la Sociedad de Naciones sobre que dicha Parte desea que la presente Convención se aplique al conjunto o a una parte de sus territorios que hayan sido objeto de una declaración según los términos del inciso precedente; y la presente Convención se aplicará a todos los territorios mencionados en dicho aviso noventa días después de la recepción del mismo por el Secretario General de la Sociedad de Naciones.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá declarar en todo momento, después de la expiración del período de cinco años previsto en el artículo 21, que dicha Parte desea que la presente Convención deje de aplicarse al conjunto o a una parte de sus colonias, protectorados, territorios ultramarinos o territorios colocados bajo su soberanía o bajo su mandato; y la Convención deberá de aplicarse a los territorios mencionados en esta declaración, un año después del recibo de la misma por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones.

4. El Secretario General comunicará a todos los miembros de la Sociedad, como también a los Estados no miembros, mencionados en el artículo XIX todas las declaraciones y todos los avisos recibidos según los términos del presente artículo.

ARTICULO XIX

La presente Convención, cuyos textos francés e inglés prestarán igualmente fe, llevará la fecha de este día, y estará, hasta el 31 de diciembre de 1936, abierta a la firma en nombre de todo miembro de la Sociedad de Naciones o de todo Estado que no sea miembro, invitado a la Conferencia que ha elaborado la presente Convención, o al cual el Consejo de la Sociedad de Naciones haya comunicado copia de la presente Convención a este efecto.

ARTICULO XX

La presente Convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación se remitirán al Secretario General de la Sociedad de Naciones, que notificará el depósito de ellos a todos los miembros de la Sociedad, como también a los Estados no miembros, de que trata el artículo precedente.

ARTICULO XXI

1. A partir del 1º de enero de 1937, podrá adherirse a la presente Convención en nombre de todo miembro de la Sociedad de Naciones o de todo Estado no miembro, contemplado en el artículo 19.

2. Los instrumentos de adhesión se transmitirán al Secretario General de la Sociedad de Naciones, que notificará el depósito de ellos a todos los miembros de la Sociedad, como también a los Estados no miembros, de que trata dicho artículo.

ARTICULO XXII

La presente Convención entrará en vigor 90 días después de que el Secretario General de la Sociedad de Naciones haya recibido las ratificaciones o las adhesiones de 10 miembros de la Sociedad de Naciones o Estados no miembros. Esta Convención se registrará en esta fecha por el Secretario General de la Sociedad de Naciones.

ARTICULO XXIII

Las ratificaciones o adhesiones depositadas después del depósito de la décima ratificación o adhesión tendrán efecto a la expiración de un plazo de noventa días a partir de la fecha de su recibo por el Secretario General de la Sociedad de Naciones.

ARTICULO XXIV

1. A la expiración de un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la presente Convención, podrá denunciarse por instrumento escrito depositado en la Secretaría General de la Sociedad de Naciones. La denuncia surtirá sus efectos un año después de la fecha en que haya sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de Naciones; dicha denuncia no valdrá sino para el miembro de la Sociedad de Naciones o para el Estado no miembro, en cuyo nombre se halla depositado.

2. El Secretario General notificará a todos los miembros de la Sociedad y a los Estados no miembros, mencionados en el artículo 19, las denuncias que así se reciban.

3º Si, en consecuencia de denuncias simultáneas o sucesivas, el número de los miembros de la Sociedad de Naciones y de los Estados no miembros que se obligan por la presente Convención, se encuentra reducido a menos de 10, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de estas denuncias tenga efecto, conforme a las disposiciones del presente artículo.

ARTICULO XXV

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá formularse en todo tiempo por cualquier miembro de la Sociedad de Naciones o Estado no miembro, obligado por esta Convención, por vía de notificación dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones. Esta notificación se comunicará por el Secretario General a todos los demás miembros de la Sociedad de Naciones y Estados no miembros por tal modo obligados, y, si esta notificación la apoyare por lo menos una tercera parte de ellos, las Altas Partes Contratantes se comprometen a reunirse en conferencia con el objeto de revisar la Convención.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios premencionados han firmado la presente Convención.

Dada en Ginebra a 26 de junio de 1936, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos de la Secretaría General de la Sociedad de Naciones, y cuyas copias certificadas auténticas se transmitirán a todos los miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 19.

Firmaron los Plenipotenciarios de los siguientes países: Austria, Bélgica, Estados Unidos del Brasil, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y todas las Partes del Imperio Británico que no figuran como miembros separados de la sociedad de Naciones; Canadá, India, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Estonia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Japón, México, Mónaco, Panamá, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza, Checoslovaquia, Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Uruguay, Venezuela.

Por Colombia firmó *ad referendum*, Rafael Guizado.

PROTOCOLO DE FIRMA

Al firmar la Convención de 1936 para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas en la fecha de hoy, los suscritos Plenipotenciarios declaran, en nombre de sus Gobiernos, aceptar:

1. Que la China subordina su aceptación de la Convención a la reserva siguiente relativa al artículo 9:

"Mientras que la jurisdicción consular de que gozan todavía los nacionales de ciertas potencias en China no sea abolida, el Gobierno chino no puede asumir las obligaciones derivadas del artículo 9, que contiene el compromiso general para las Partes Contratantes de conceder la extradición de extranjeros, culpables de delitos contemplados en dicho artículo."

2. Que los Países Bajos subordinan su aceptación de la Convención a la reserva de que, según los principios fundamentales del Derecho Penal neerlandés, los Países Bajos no podrán conformarse con el subparágrafo c) del artículo 2, sino en los casos en donde haya comienzo de ejecución.

3. Que la India subordina su aceptación de la Convención a la reserva de que dicha Convención no se aplique a los Estados de la India, ni a los Estados de Shan (que hacen parte de la India Británica).

En fe de lo cual los suscritos han puesto sus firmas al pie del presente Protocolo.

Hecho en Ginebra el 26 de junio de 1936 en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones, y cuyas copias certificadas auténticas se remitirán a todos los miembros de la Socie-

dad de Naciones, y a los Estados no miembros, mencionados en el artículo 19 de la Convención.

Siguen las firmas de los Plenipotenciarios.

ACTA FINAL

Los Gobiernos de Afganistán, Estados Unidos de Norte América, Austria, Estados Unidos del Brasil, Reino Unido de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irak, Estado Libre de Irlanda, Japón, Liechtenstein, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Siam, Suiza, Checoslovaquia, Turquía, Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Uruguay, Estados Unidos de Venezuela y Yugoslavia,

habiendo aceptado la invitación que se les dirigió en cumplimiento de la resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones, con fecha 20 de enero de 1936, con la mira de concluir una Convención para la represión del tráfico ilícito de las drogas peligrosas,

han nombrado los Delegados siguientes:

(Aquí la lista).

que se han reunido en Ginebra.

El Consejo de la Sociedad de Naciones ha llamado a las funciones de Presidente de la Conferencia al señor Joseph Limburg, miembro del Consejo de Estado de los Países Bajos.

La Conferencia ha nombrado como Vicepresidente suyo al señor De Reffye, Ministro Plenipotenciario, Subdirector de lo Contencioso y de las Cancillerías en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la República Francesa.

Ha desempeñado las funciones de Secretario General de la Conferencia el señor Eric Einar Ekstrand, Director de las Secciones del Tráfico del Opio y de las cuestiones sociales, en representación del Secretario General de la Sociedad de Naciones.

En consecuencia de las reuniones celebradas del 8 al 26 de junio de 1936, aprobáronse los actos siguientes:

I. Convención de 1936 para la represión del tráfico ilícito de las drogas peligrosas.

II. Protocolo de firma de la Convención.

La Conferencia ha adoptado igualmente lo que sigue:

I—INTERPRETACIONES

1. Se entiende que las estipulaciones de la Convención, y en particular las estipulaciones de los artículos 2 y 5, no se aplican a los delitos cometidos sin intención.

2. El artículo 15 debe interpretarse en el sentido de que la Convención no atenta en modo alguno contra la libertad de las Altas Partes Contratantes para regular el régimen de las circunstancias atenuantes.

II—RECOMENDACIONES

1. La Conferencia,

Recordando que la Conferencia Internacional del Opio, de 1912, resuelta a lograr la supresión progresiva del abuso del opio, ha insertado a la Convención Internacional del Opio, de 1912, el artículo 6, siguiente:

“Las Potencias Contratantes tomarán medidas para la supresión gradual y eficaz de la fabricación, del comercio interior y del uso del opio preparado, dentro de los límites de las diversas condiciones propias de cada país, a menos que ya se hayan dictado medidas para reglamentar la materia.”

Recordando que las Partes, en el acuerdo de Ginebra sobre el opio, de 1925, han declarado, en el preámbulo, que estaban firmemente resueltas a efectuar la supresión gradual y eficaz de la fabricación, comercio interior y uso del opio preparado, según lo previsto en el Capítulo II de la Convención Internacional del Opio, de 1912, en sus posesiones y territorios del Extremo Oriente, incluso los territorios cedidos en arrendamiento o protegidos, en los cuales el uso del opio preparado está todavía autorizado, y que dichas Partes estaban deseosas, por razones de humanidad y con la mira de asegurar el bienestar social y moral de los pueblos interesados, de tomar todas las medidas útiles para realizar, dentro del más breve plazo posible, la supresión del uso del opio fumable;

Deseosa de aprovechar la ocasión que le ofrece la presente Conferencia de dirigir a los Estados interesados un llamamiento invitándoles a proseguir sus esfuerzos en este campo:

RECOMIENDA que los Gobiernos que permiten todavía el uso del opio para fines distintos de los medicinales o científicos, adopten, dentro del más breve plazo, todas las medidas eficaces con el fin de abolir este uso del opio.

2. La Conferencia recomienda que los países que admiten el principio de la extradición de sus naturales, concedan la extradición de los que se encuentren en sus territorios y se hayan hecho culpables en el Extranjero por infracciones previstas en el artículo 2, aun en el caso de que el Tratado de extradición aplicable, contenga una reserva respecto de la extradición de los nacionales.

3. La Conferencia recomienda a las Altas Partes Contratantes crear, llegado el caso, un servicio especializado de policía para los fines de la presente Convención.

4. La Conferencia recomienda que la Comisión consultiva del tráfico del opio y otras drogas peligrosas, examine la oportunidad de reuniones de los representantes de las oficinas centrales de las Altas Partes Contratantes, con el fin de asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboración internacional contemplada por la presente Convención; y, llegado el caso, dé aviso al respecto al Consejo de la Sociedad de Naciones.

EN FE DE LO CUAL los Delegados han firmado el presente Acto.

HECHO en Ginebra a 26 de junio de 1936, en un solo ejemplar, que será depositado en los Archivos de la Secretaría de la Sociedad de Naciones; y copias auténticas del cual serán remitidas a todos los Estados representados en la Conferencia.

El Presidente de la Conferencia (firmado), **Limburg**—El Vicepresidente de la Conferencia (firmado) **P. de Reffye**. El Secretario General de la Conferencia (firmado), **Eric Einar Ekstrand**. (Siguen las firmas de los Delegados).

Organo Ejecutivo—Bogotá, seis de septiembre de mil novecientos cuarenta.

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales.

EDUARDO SANTOS

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Luis LOPEZ DE MESA

Es copia fiel.

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Alberto González Fernández

decreta:

Artículo único. Apruébase la Convención preinserta, sobre represión del tráfico de drogas peligrosas.

Dada en Bogotá a veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.

El Presidente del Senado, **PEDRO CASTRO MONSALVO**. El Presidente de la Cámara de Representantes, **MOISES PRIETO**—El Secretario del Senado, **Jaime Soto**—El Secretario de la Cámara de Representantes, **Andrés Chaustre B.**

Organo Ejecutivo—Bogotá, 11 de marzo de 1943.

Publiquese y ejecútense.

ALFONSO LOPEZ

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho,

A. GONZALEZ FERNANDEZ

LEY 13 DE 1943 (11 DE MARZO)

por la cual se aprueba el Estatuto de Régimen Fronterizo, suscrito por la República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, en Caracas, el 5 de agosto de 1942.

El Congreso de Colombia

decreta:

Artículo único. Apruébase el Estatuto de Régimen Fronterizo, celebrado entre la República y los Estados Unidos de Venezuela, que dice:

“Los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de Venezuela, animados del propósito de estrechar sus vínculos fraternales, y convencidos de las ventajas que habrán de obtenerse facilitando las relaciones que forma el frecuente tránsito en las regiones limítrofes de ambos países, han resuelto con esos fines pactar un Estatuto de Régimen Fronterizo, y a este efecto han designado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: